

Anuario Internacional CIDOB 2008

Claves para interpretar la Política Exterior Española y las Relaciones Internacionales en 2007

Nigeria, perfil de país

Funmi Olonisakin y Olawale Ismail

Nigeria, perfil de país

Funmi Olonisakin y Olawale Ismail,
Grupo de Conflictos, Seguridad y Desarrollo,
King's College, Londres

El final del siglo XX fue significativo para Nigeria en varios sentidos importantes, especialmente por su vuelta a la democracia electoral en mayo de 1999, después de dieciséis años de gobierno militar ininterrumpido. El regreso a la democracia representativa, así como el segundo advenimiento de Obasanjo (tras gobernar como jefe de Estado militar entre 1976 y 1979, y muy respetado por entregar el poder a un régimen elegido) fueron saludados con un desenfundado optimismo de dividendos democráticos –progreso en las esferas socio-económica, política y tecnológica, y una completa renovación nacional– dentro y fuera del país. Fue algo especialmente simbólico en el contexto de unas violaciones masivas de los derechos humanos, desgobierno político y una pésima administración por parte de los sucesivos gobernantes militares, particularmente los regímenes de Babangida y Abacha. Durante la década de los noventa, Nigeria, especialmente bajo el régimen de Abacha (1993-98), volvió a ser un “Estado paria” marcado por las suspensiones y el aislamiento de las principales organizaciones y foros diplomáticos internacionales. Ello representó un asombroso retroceso desde el valioso estatus puntero –“el gigante africano”– de que gozó en los setenta debido a su apoyo financiero, moral, político y diplomático a los movimientos de liberación en África, y a la paz internacional (mediante su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz lideradas por las Naciones Unidas).

Casi una década después, el optimismo, la esperanza y la buena voluntad que acompañaron la llegada al poder, el 29 de mayo de 1999, del régimen y del gobierno democrático de Olusegun Obasanjo, han sido sustituidos por el pesimismo y la desesperación, sobre todo debido a la miríada de complicaciones y a la degeneración en las relaciones intergrupales, en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, al desgobierno y a la incertidumbre políticas, y a las condiciones de empobrecimiento imperantes. El recrudecimiento durante el gobierno post-militar de disturbios, conflictos armados, inseguridad y corrupción son sarcásticamente saludados como los más evidentes “dividendos” de la democracia. Las realidades posteriores a 1999 muestran en realidad cómo el comienzo del siglo XXI ha puesto de manifiesto y ha magnificado los importantes retos socioeconómicos y políticos que han caracterizado al estado nigeriano desde su independencia de Gran Bretaña en octubre de 1960. La era post-militar puso al descubierto los graves problemas de la pobreza, el deterioro de las infraestructuras, la mala gestión económica, las espantosas relaciones intergrupales (étnicas y religiosas) y la violencia subnacional, la inestabilidad política y las amenazas de colapso estatal.

La escala de estos retos apenas disminuyó durante el régimen de Obasanjo, y ello caracterizó también las reformas políticas, sociales y económicas posteriores a 1999. Las reformas socioeconómicas intensificaron la liberalización de las actividades socioeconómicas, la privatización de los activos estatales, la agresiva estabilización del entorno y de los índices macroeconómicos, y el énfasis en la regulación estatal por oposición a la participación. Este fue un proceso reactivado a finales de la década de los ochenta por el régimen militar de Babangida con la adopción del SAP (*Structural Adjustment Programme*), el programa de ajuste orientado por el Banco Mundial. Políticamente, se hicieron intentos de reformar el sistema electoral (hasta ahora sin éxito), de promover el diálogo intergrupar mediante una ligera y atenuada conferencia nacional sobre la reforma política, y de sacar a la luz y corregir pasadas violaciones a los derechos humanos mediante una Comisión de Derechos Humanos (el Oputa Panel). Los grupos de la sociedad civil que se habían mostrado activos resistiendo al gobierno militar también ampliaron el espacio político mediante múltiples desafíos judiciales y constitucionales que tuvieron como resultado un incremento en el número de partidos políticos, la revocación de decretos odiosos introducidos bajo el régimen colonial y bajo los regímenes militares posteriores a la proclamación de la independencia, y una mejora general en la transferencia de la esfera pública.

Sin embargo, las múltiples reformas neoliberales en las esferas política y socioeconómica han fracasado o han tenido un éxito muy escaso, habiendo conseguido tan sólo satisfacer mínimamente los objetivos que se habían planteado. De hecho, los logros que se han puesto de manifiesto por medio de las reformas y de la



liberalización de los espacios políticos y socioeconómicos han producido resultados contradictorios: aumento del crecimiento económico e intensificación de la pobreza; más libertad política y una mayor transparencia, y un atroz recrudecimiento de las confrontaciones violentas intergrupales y en el interior del Estado.

Las reformas socioeconómicas del régimen de Obasanjo tuvieron unas consecuencias desiguales. Por un lado, hubo una encomiable medida de estabilidad macroeconómica —en el control de la inflación, en la política monetaria y en la planificación económica general— y mejoras en el sector de las telecomunicaciones y en los sectores financieros (banca, seguros y mercado del capital). El gobierno también fue elogiado por los medios de comunicación nacionales e internacionales por sus instituciones y campañas anticorrupción. El paquete especial de alivio de la carga de la deuda negociado el año 2005 por el régimen de Obasanjo, por el que se pagaron más de 12.000 millones de dólares al Club de París (a cambio de la condonación de una deuda de 18.000 millones de dólares) fue tan aplaudido como criticado, teniendo en cuenta el nivel de pobreza del país y sus deficiencias infraestructurales.

Por otro lado, la agresiva reversión del Estado en la planificación del desarrollo sin la infraestructura requerida para atraer, sostener y complementar capital monopolista ha expuesto a la mayoría de la población a los peligros (*shocks*) de las reformas radicales, a una pobreza generalizada (más del 70% de la población vive con menos de 1 dólar al día), y a la discapacidad socioeconómica. Además, la campaña anticorrupción fue muy selectiva y estuvo restringida a los oponentes del presidente Obasanjo y del PDP (*People's Democratic Party* o Partido Democrático Popular), el partido en el poder. Hasta el punto de que hubo acusaciones sustanciales y muchas complicidades en los casos de latrocinio, soborno y deshonestidad que caracterizaron a los proyectos del gobierno del PDP —la mayor parte de los proyectos fueron escasamente implementados o no llegaron a completarse.

Además, las infraestructuras socioeconómicas y las estructuras para el transporte y la electricidad, siguen siendo de baja calidad y están muy deterioradas. De hecho, la corrupción a gran escala, el carácter selectivo de las campañas contra la corrupción, y la mala o nula planificación explican el enorme deterioro en las infraestructuras para el transporte y la electricidad (hay muy poco que mostrar teniendo en cuenta las enormes sumas gastadas en la rehabilitación de carreteras y en los embalses para generar electricidad). En general, las reformas socioeconómicas siguen siendo institucionalmente endebles y personalistas, y no han conseguido mejorar en absoluto el nivel de vida de la mayoría de nigerianos.

Políticamente, el regreso al gobierno democrático ha acentuado el espectro de las exigencias intergrupales (faccionales) y sectarias, las sospechas, las acusaciones y contra-acusaciones, y los conflictos armados. Naturalmente, la emergencia de milicias étnicas/faccionales se remonta a la institucionalización de las estrategias grupales de autoayuda de la década de los noventa, directamente concebidas a modo de resistencia frente al gobierno militar y como forma de protegerse de la persecución del ejército. Sin embargo, en el período posterior a 1999 se produjo un recrudecimiento en el número de grupos armados que causan agitación con objetivos faccionales e incluso separatistas, y en la frecuencia de las confrontaciones con otras milicias grupales y el Estado nigeriano.

El carácter abierto de estos grupos, así como sus actores, exigencias y actividades, es paralelo a la percepción y a la realidad de un incremento en la libertad y en el espacio para llevar a cabo estrategias de autoayuda. El rápido crecimiento de las milicias grupales juveniles de base étnica en todo el país ha desencadenado una dinámica autoregeneradora de competición intergrupala negativa, de la que son indicios la carrera de armamentos, el equilibrio del terror y el número de bajas, y la imitación mutua entre muchos de los 250 grupos étnico-nacionales que se estima existen en Nigeria. En el Sudoeste, se constituyó el Congreso Popular Oodua (OPC) que afirma defender los intereses socioculturales, económicos y políticos de la nación yoruba. En la parte más meridional del país, han aparecido el Congreso Nacional Ijaw, la Fuerza de Voluntarios del Pueblo del Delta del Níger, y el MEND (Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger), para defender los intereses socioeconómicos y políticos de la nación ijaw, especialmente el de conseguir un mayor control y participación en los recursos gasísticos y petrolíferos de la región. En el norte, se ha formado el Congreso del Pueblo de Arewa (APC) para defender los intereses sociopolíticos de la nación hausa-fulani en el contexto de la percepción de un ataque por miembros de su propia etnia.

La presencia de estos grupos subraya las complejidades de Nigeria —la multietnicidad y el volumen enorme de su población (140 millones de personas), una mayoría de las cuales son jóvenes (lo que pone de relieve un claro desequilibrio demográfico)—. Las milicias son las responsables de más del 90% de los conflictos armados y de la violencia en la era post-militar, con consecuencias muy perjudiciales para la incipiente democracia y el desarrollo socioeconómico de Nigeria. Sólo entre 1999 y 2003 se registraron más de 50 casos de enfrentamientos armados, que tuvieron como consecuencia el desplazamiento interior de más de 500.000 personas y la destrucción de infraestructuras socioeconómicas. Los constantes conflictos fueron perjudiciales para el entorno empresarial, disminuyeron gravemente la confianza de los inversores, y debilitaron el modelo de desarrollo pomposamente anunciado por el gobierno (basado en la

“Una característica positiva de la política en 2007 fue el gradual fortalecimiento de instituciones democráticas fundamentales”

inversión extranjera). Entre 1999 y 2007, el régimen de Obasanjo trató de contener la orgía de violencia, fluctuando entre la contemporización y la tolerancia, entre el compromiso y la represión más enérgica. La compleja red de divisiones socioculturales; la politización de las identidades, los nombramientos y las políticas gubernamentales; la tenue coincidencia entre los alineamientos políticos y las líneas divisorias étnicas; y las exigencias políticas para la supervivencia del gobernante Partido Democrático Popular, limitaron la capacidad de Obasanjo para gestionar efectivamente o para tratar con las diferentes milicias grupales.

Y lo que es aún más importante: fue la política sucesoria durante el período previo a las elecciones del 2007 lo que definió de un modo más notable el retorno de Nigeria a la democracia, y el gobierno de Obasanjo en particular. La política sucesoria dejó al descubierto los muchos puntos débiles existentes en las estructuras internas de los partidos políticos, el carácter defectuoso del sistema electoral y la manipulación de las comisiones electorales, la complicidad de las agencias de seguridad en las malas prácticas electorales, y la poca desarrollada capacidad para internalizar los elementos normativos de la buena gobernanza. Tras una frustrada tentativa de un tercer mandato (un fantástico proceso de reforma constitucional que tenía que permitir a Obasanjo presentarse por tercera vez a las elecciones presidenciales), el presidente y el PDP recurrieron a una tortuosa manipulación del proceso electoral mediante la intimidación y el hostigamiento a los oponentes políticos, la arbitrariedad y el apoyo descarado por parte de la comisión electoral a quienes estaban en el cargo. El desprecio por el imperio de la ley se tradujo en unas elecciones poco limpias y con unos resultados predeterminados. Por ejemplo, Obasanjo manipuló el proceso electoral (esgrimando el espanto de la “anticorrupción”) para excluir/descalificar a sus oponentes políticos, y muy especialmente a su antiguo vicepresidente (Abubakar Atiku), hasta provocar su retirada por medio de un dictamen judicial en vísperas de las elecciones, lo que dejó a los grupos de la oposición muy poco tiempo para enfrentarse con un mínimo de probabilidades al sucesor elegido a dedo de Obasanjo (Umaru Yar’Adua).

De una forma no deliberada, el no respeto de las disposiciones constitucionales relativas a las elecciones ha fortalecido el papel supervisor y los poderes del poder judicial mediante su firme revocación de las acciones anticonstitucionales de la comisión electoral y la anulación de los resultados electorales. Así y todo, la no observación de las normas electorales apropiadas ha tenido como resultado un incremento de las incertidumbres políticas y ha afectado a la gobernanza.

Paradójicamente, las acciones (los fracasos) domésticos del régimen contrastan claramente con la imagen prodemocrática, conciliadora y de estadista de Obasanjo en la arena continental e internacional, como se puso de manifiesto en el acuerdo nego-

ciado (con el arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia) en la disputa con el Camerún por la Península de Bakassi, rica en petróleo; en el papel mediador que desempeñó en los conflictos de Sudán, Liberia, Sierra Leona, São Tomé y Príncipe, Togo, Zimbabwe y Côte d’Ivoire; y en su papel de actor clave en la búsqueda de unas mejores condiciones socioeconómicas, políticas y de seguridad en África (a través de la Unión Africana).

El 2007, la percepción doméstica del regreso de Nigeria a la democracia y de los ocho años de gobierno de Obasanjo era la de una “oportunidad perdida” —un régimen plagado de contradicciones, derroches y engaños, que había dilapidado la buena voluntad y los recursos económicos (el alto precio del petróleo)—. En términos concretos, el régimen llegó a ser sinónimo de autoritarismo democrático, incompetencia y desgobierno políticos, mala gestión económica, corrupción y empobrecimiento de la población. Internacionalmente, el carácter viciado de las elecciones, con la complicidad de Obasanjo, representó una “decepción” y un mal precedente para Nigeria —una inversión del emergente consenso sobre los estándares democráticos en África. Los acontecimientos subsiguientes en el escenario doméstico y africano han confirmado este punto de vista. En el frente doméstico, esto se reflejó en la revocación de las elecciones por los tribunales en el 2007, en los diversos casos de corrupción en los que estuvieron implicados el PDP y sus dirigentes, incluido Obasanjo, y en el derroche de recursos en las no mejoradas infraestructuras del transporte y la electricidad. En la escena africana, esto se ejemplificó mediante una fraudulenta manipulación de las elecciones en Kenya. Cuando se produjo la toma de posesión de la administración Yar’Adua en el 2007, el Estado nigeriano era una mezcla desconcertante de crecimiento económico sin beneficio para los ciudadanos, gobierno democrático sin imperio de la ley, y libertad sin seguridad.

El año 2007 en perspectiva

El año 2007 fue muy rico en acontecimientos políticos, con mucho dramatismo y dinámica tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional. La gama de acontecimientos clave en la escena doméstica giró en torno a los períodos previo y posterior a las elecciones nacionales del 21 de abril. La intensa especulación, politiquería y forcejeos por hacerse con el poder político tanto dentro como fuera del PDP, el partido gobernante, puso de relieve temas como la revisión de la Constitución, la lucha contra la corrupción, el imperio de la ley y la independencia judicial. A continuación describimos algunos de los acontecimientos fundamentales, tanto domésticos como internacionales, ocurridos durante el 2007 y comienzos del 2008.



La política sucesoria y las elecciones amañadas

El año 2007 empezó con la confirmación de Umaru Yar'Adua y Jonathan Goodluck como candidatos presidencial y vicepresidencial respectivamente del partido gobernante (PDP) en las elecciones de abril del 2007. El PDP acabó ganando finalmente las elecciones y sus candidatos ocupando sus cargos en el gobierno. Tanto Yar'Adua como Goodluck habían sido gobernadores por el PDP de los estados de Katsina y Bayelsa (este último rico en petróleo) respectivamente, y habían sido elegidos como candidatos con el claro apoyo del presidente Obasanjo.

El presidente Yar'Adua pertenece al políticamente popular y poderoso clan de los Yar'Adua (del estado de Katsina), con una historia de participación en la política nigeriana. Umaru Yar'Adua es el hijo de un antiguo ministro (para los Asuntos de Lagos) durante la primera república de Nigeria (1960-1966), y uno de los hermanos más jóvenes del difunto teniente general

Musa Yar'Adua, que fue el hombre de confianza del presidente Obasanjo cuando éste gobernó militarmente el país entre 1976 y 1979.

La elección por parte de Obasanjo de Umaru Yar'Adua, a pesar de su delicado estado de salud (problemas renales) pone de relieve los antiguos vínculos familiares entre Obasanjo y los Yar'Adua (y, de un modo más general, con el clan político de los hausa-fulani del norte del país), que habían proporcionado un respaldo político decisivo a Obasanjo tanto en su etapa militar como democrática.

El vicepresidente Goodluck procede de la región geopolítica de Southsouth y pertenece al grupo étnico minoritario de los ijaw, que se ha mostrado muy activo para incrementar su poder y representación políticos, y el control de la riqueza petrolífera. Jonathan Goodluck fue nombrado gobernador tras la destitución de Diepreye Solomon Peter Alamiyeseigha, que había sido acusado de corrupción (diciembre de 2005). Aparte de ex gobernadores, ambos candidatos habían sido también profesores universitarios, y ninguno de los dos había hecho campaña ni aspirado abiertamente a ser el candidato del PDP –ambos fueron designados (elegidos a dedo) por el propio Obasanjo.

De todos modos, la dinámica política durante la fase previa a las elecciones del 2007 es importante en la medida en que contribuye a configurar el escenario político, los alineamientos de poder y el resultado de las elecciones. En un primer momento, Obasanjo jugó un papel decisivo en la emergencia del dúo después de la derrota de la moción para la enmienda constitucional

en el Senado nigeriano en mayo del 2006 (que siguió a una fuerte protesta de los medios de comunicación y de la sociedad civil). La moción contenía partes que hubieran permitido al presidente Obasanjo presentarse para un tercer mandato. Fue basándose en este hecho que Obasanjo desempeñó un papel central influyendo en la elección de su sucesor. La política sucesoria dentro del partido gobernante (PDP) llevó a la imposición de sanciones, a la expulsión y a la intimidación de los potenciales aspirantes presidenciales, para despejar el camino a favor de los elegidos por Obasanjo. El en otro tiempo influyente Abubakar Atiku (vicepresidente de Obasanjo durante ocho años), un funcionario de aduanas jubilado de Adamawa (en el norte de Nigeria) y aliado y colaborador del difunto Musa Yar'Adua, además de otros candidatos (como Uzor Kalu, de Abia, en el sudeste de Nigeria) fueron expulsados del PDP acusados de llevar a cabo actividades “en contra del partido”.

La expresión “actividades contra los intereses del partido” se utilizó para calificar los actos y actuaciones que iban en contra de la elección y de los puntos de vista de Obasanjo, a menudo presentados como decisiones de la jerarquía del PDP. Otros candidatos, incluidos Jerry Gana, Aliyu Gusau y otros gobernadores en ejercicio fueron, o bien presionados para que se retiraran, o bien desautorizados y derrotados durante las elecciones primarias del 16 de diciembre de 2006. Obasanjo, aliado con otros oficiales militares retirados (como Ahmadu Ali y Bode George, que eran presidente y vicepresidente del PDP respectivamente), se habían hecho con el control de la maquinaria del partido siguiendo una re-inscripción de los miembros del mismo poco después de las elecciones del 2003. La reinscripción borró de las listas y desplazó a los oponentes de Obasanjo y a quienes eran percibidos como tales, de las posiciones clave del partido, y reemplazados por partidarios de Obasanjo. Esto fue fundamental para dotar a Obasanjo de la influencia necesaria y de la capacidad para vetar a los candidatos a las elecciones del PDP en todo el país.

Aunque algunos de los miembros expulsados del PDP fundaron nuevos partidos políticos (como el AC –Acción para el Congreso– de Atiku), que estuvieron entre los más de veinte que impugnaron las elecciones, el elevado número de partidos opositores sirvió para reforzar políticamente al PDP. Así y todo, no está claro si la victoria del PDP se debió realmente a su fuerza (mejor financiación, implantación en todo el territorio nacional y control de los recursos y organismos del Estado) o directamente a la manipulación de las elecciones. Durante el período previo a las elecciones de abril, la agencia anti-corrupción creada por Obasanjo (EFCC–Comisión de Delitos Económicos y Financieros) fue fuertemente manipulada y politizada por el presidente y el PDP para que diese a conocer nombres de personas consideradas corruptas, aunque no hubieran sido juzgadas o condenadas por un tribunal competente. La lista de la EFCC incluía los

“Uno de los aspectos más destacados del regreso de Nigeria a la democracia electoral fue la creación de las agencias anti-corrupción”

nombres de los candidatos más importantes de la oposición (como Atiku y Kalu) que se presentaban a las elecciones a diversos niveles, y se convirtió en la base para la descalificación de muchos candidatos de la oposición por parte de la comisión electoral siguiendo las recomendaciones de un jurado administrativo creado por Obasanjo para investigar a las personas acusadas de corrupción. De hecho, fue una decisión de última hora del Tribunal Supremo la que obligó a la INEC (Comisión Electoral Nacional Independiente) a incluir el nombre de Atiku en las papeletas electorales. El PDP obtuvo aproximadamente el 75% de los cargos electivos en todo el país, y Yar'Adua consiguió la presidencia por un margen impresionante.

Los informes de los equipos de observadores locales e internacionales encargados de la supervisión de las elecciones, y de los grupos de defensa de los derechos humanos documentan la existencia de graves irregularidades en las elecciones –violencia e intimidación a los votantes antes de las elecciones y durante las mismas, flagrante incumplimiento de las leyes y de las normas del proceso electoral, mala planificación y logística, voto fraudulento y apropiación indebida del material electoral, entre otras muchas irregularidades–. Estas imputaciones y las violaciones internas de las leyes electorales por parte del PDP (eligiendo a dedo, imponiendo y sustituyendo a los candidatos legítimamente nombrados) con la activa connivencia de la INEC parecen haber sido confirmadas por la gran cantidad de impugnaciones judiciales de las victorias del PDP después de las elecciones del 2007. En marzo del 2008, las elecciones presidenciales eran impugnadas ante el Tribunal Supremo por Atiku (AC) y Buhari (Partido de todo el Pueblo de Nigeria–ANPP), al mismo tiempo que siete resultados de las elecciones a gobernador (seis de los cuales afectaban al PDP) eran anulados por los tribunales electorales en todo el país.

Incrustado en la política sucesoria estaba el complejo y complicado tema de la “rotación en el poder” (un eufemismo para referirse al hecho de la división del poder político entre circunscripciones electorales). De acuerdo con la Constitución de 1999, Nigeria fue dividida en seis regiones geopolíticas (Southwest, Southeast, Southsouth, Northeast, Northwest y North Central), y se produjo un implícito reconocimiento de que el poder político tenía que pasar de modo rotatorio por todas ellas. La complejidad de esta convención acerca de la rotación del poder se puso de manifiesto con la discusión relativa a si el reparto del poder tenía que ser entre el Norte y el Sur en sentido amplio, o entre las seis regiones geopolíticas más pequeñas. La complejidad se vio amplificada por el origen de Obasanjo como yoruba del sudoeste y por el hecho de que su período de ocho años en la presidencia simbolizaba el gobierno del sur o del sudeste. Finalmente, 25 candidatos impugnaron las elecciones presidenciales, y entre ellos había ocho del norte y quince del sur. La victoria de Yar'Adua parece reforzar la división

Norte-Sur como base principal para la rotación del poder. En general, una característica positiva de la política en 2007 fue el gradual, aunque imperceptible, fortalecimiento de instituciones democráticas fundamentales como el Parlamento, el sistema judicial, los medios de comunicación y las agrupaciones de la sociedad civil.

Anticorrupción

Uno de los aspectos más destacados del regreso de Nigeria a la democracia electoral fue la creación por parte de la administración de Obasanjo de las agencias anticorrupción, principalmente la ICPC (Comisión Independiente de Prácticas de Corrupción y otros delitos relacionados) y la EFCC (Comisión de Delitos económicos y Financieros) en el 2000 y el 2004 respectivamente. Dichas agencias eran muy necesarias debido a la nada envidiable posición que ocupaba Nigeria como uno de los países más corruptos del mundo. En 1995, Colin Powell, el antiguo secretario de Estado norteamericano describió a Nigeria como una nación de tramposos para subrayar el número cada vez mayor de chanchullos que se producían en Nigeria². De hecho, las comisiones fraudulentas por servicios inexistentes y otras formas de fraude (popularmente conocidas en Nigeria como “el timo 419”, por el número del artículo del código penal que violan) y la corrupción oficial son “legados” (prácticas institucionalizadas) de los sucesivos regímenes militares, especialmente los de Babangida y Abacha en la década de 1990³. Haciendo una rápida búsqueda en internet del concepto *scams* [chanchullos, estafas], se encuentran cantidad de enlaces que remiten a Nigeria y a los nigerianos. En 1999, de acuerdo con el sondeo internacional del grupo de control y supervisión de la corrupción TI (*Transparency International*), Nigeria ocupaba el segundo lugar, detrás de Camerún, entre los 99 países incluidos en sus índices de percepción de la corrupción. El país fue clasificado como el más corrupto en el 2000 y como el segundo más corrupto en el 2001 y el 2002. Según las estimaciones de la EFCC, entre los años 1960 y 1999, los que gobernaban el país robaron o despilfarraron más de 380.000 millones de dólares de dinero público⁴.

El impacto positivo de la EFCC en el período previo a las elecciones del 2007 se hizo notar en el hecho de que el país cayó de la lista de países no cooperadores de la FAFT (Financial Action Task Force-Grupo de acción Financiera), una iniciativa intergubernamental para prevenir el blanqueo de dinero, y en el hecho de que bajase hasta el lugar 32 en la lista del TI del 2007 de países con un nivel menor de transparencia⁵. El pionero presidente de la comisión, Nuhu Ribadu, se convirtió enseguida en el zar de la anticorrupción en Nigeria y se ganó el reconocimiento internacional. La EFCC se mostró proactiva y receptiva ante la corrup-

ción no oficial (chanchullos y “actividades tipo 419”), pero ha sido ineficaz para poner decisivamente freno a la corrupción oficial. Sin embargo, fue la politización de la EFCC, concretamente el hecho de que hiciera públicos los nombres de personas sometidas a investigación, principalmente de políticos de la oposición, en el período previo a las elecciones, lo que apareció de forma más destacada en los titulares de los periódicos. El uso de la EFCC para hostigar, intimidar y descalificar a los candidatos de la oposición provocó una amplia condena local e internacional, y comprometió también su independencia, efectividad y la percepción que de ella tenía la opinión pública.

Durante la mayor parte del año 2007, la EFCC fue acusada de llevar a cabo una guerra selectiva contra la corrupción —una persecución de políticos de la oposición y una acción puramente cosmética respecto a los aliados del presidente Obasanjo y a los líderes de más alto rango del PDP. No tiene nada de sorprendente que la era post-Obasanjo haya sido testigo de la aparición de un nuevo brote de casos de irregularidades, robos y otras prácticas corruptas perpetradas por dirigentes de alto rango del PDP (bajo

Obasanjo), con acusaciones de complicidad

en contra de Obasanjo. Entre los casos

más notables se cuentan las inves-

tigaciones de Willbros (Estados

Unidos) y Siemens (Alemania)

por parte de sus gobiernos

nacionales por prác-

ticas de corrupción

(soborno) a cambio de la

aprobación de proyectos en

sus operaciones en el extranjero

(en Nigeria) a finales del 2007. En

general, los acontecimientos del 2007 y

comienzos del 2008 (especialmente la velada

destitución de Ribadu después de su intento de

hacer valer la independencia de la EFCC arres-

tando a varios líderes y antiguos gobernadores del

PDP) ponen de manifiesto las inmensas limitaciones

de la campaña contra la corrupción en Nigeria: una

base institucional débil, la no independencia respecto

a los ocupantes del poder y la limitada implicación

de los grupos de la sociedad civil. Indudablemente, la

corrupción oficial y no oficial sigue siendo uno de los

principales obstáculos para la mejora de la gobernanza

y el desarrollo económico en Nigeria⁶.

Desarrollo económico

De acuerdo con las estimaciones del Banco Central Nigeriano, la economía del país creció un 6%, ajustándose de este modo a las pautas de crecimiento imperantes desde el 2004. El crecimiento se vio activado por la continua contribución y por el crecimiento del sector agrícola (que se situó en un 7%), así como por la expan-

sión y el incremento de las inversiones extranjeras en el liberalizado sector de las telecomunicaciones (en el que en el año 2006 se invirtieron más de 10.000 millones de dólares). Después de la puesta en marcha, el año 2004, de la iniciativa NEEDS (Estrategia Nacional de Potenciación y Desarrollo Económico), una versión doméstica de los objetivos de desarrollo del milenio, el gobierno también registró una considerable estabilidad macroeconómica y una mejor planificación mediante objetivos temporalmente acotados y marcando trayectorias al desarrollo socioeconómico. Esto se reflejó en la exitosa recapitalización de los sectores bancario, de los seguros y financiero, en la expansión de las redes de telecomunicaciones, y en la reestructuración y monetización del servicio público. El año 2007, varias empresas de propiedad estatal en sectores como las telecomunicaciones, las refinerías petrolíferas y petroquímicas, las industrias del acero y el aluminio, las compañías de seguros y otras compañías estatales fueron privatizadas para reducir el gasto público y disminuir el papel del estado en la regulación.

Sin embargo, el montón de reformas económicas y el ahorro derivado de la reducción de la deuda externa (acuerdos sobre el alivio de la carga de la deuda) anterior al 2007 y durante este año, han tenido un impacto limitado, especialmente a la hora de mejorar el nivel de vida de los nigerianos de a pie, y la inflación todavía se registra con números de dos cifras (13,6% en el 2007), y aproximadamente un 60% de la población todavía se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Por un lado, el índice de crecimiento estuvo todavía por debajo del objetivo del 10% previsto en la NEEDS. El crecimiento limitado es emblemático de los defectos estructurales en la economía, especialmente de su base monomineral —altamente dependiente del gas y el petróleo, que aportan un 20% del Producto Interior Bruto y un 95% de los ingresos presupuestarios—. Y por otro lado, la corrupción, la mala planificación y la escasa implementación han producido el estancamiento de la transformación socioeconómica. Por ejemplo, la mayoría de las empresas estatales privatizadas fueron vendidas a amigos y aliados (financieros) del PDP, a menudo con un desprecio flagrante por la competencia técnica. De hecho, se ha sabido que Obasanjo posee la mayoría de las acciones en la compañía (Transcorp) que compró la empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal de Nigeria Telecommunications (NITEL).

Una cuestión de suma importancia es que infraestructuras críticas —electricidad, transporte (carreteras, ferrocarriles, aviones), mantenimiento del orden y líneas de microcrédito— o bien no están disponibles o bien están absolutamente deterioradas, situación esta que impide un crecimiento económico real. Por ejemplo, entre 1999 y 2007 se gastaron aproximadamente 16.000 millones de dólares para mejorar el suministro eléctrico, y sin embargo, éste sigue siendo epiléptico, y el país solamente produce el 50% de la capacidad teóri-

ca de 6.130 kilowatios que permiten las instalaciones, y menos de la mitad de la demanda real. Asimismo, a pesar de haber gastado más de 300.000 millones de nairas (2.200 millones de dólares) en infraestructuras para el transporte en carretera entre el 1999 y el 2006, los 34.403 kilómetros de carreteras del país siguen siendo de mala calidad, con un elevado índice de accidentes, y en algunos casos (como en la importante red Lagos-Ibadán-Sagamu) se encuentran al borde del colapso. Hay que reconocer que el transporte por ferrocarril recibió una atención de última hora por parte de la administración Obasanjo con un contrato de modernización de la red de ferrocarriles de 17.000 millones de dólares que se firmó con una serie de compañías chinas para transformar los 3.505 kilómetros de vías férreas de vía estrecha a un ancho de vía estándar en un período de 25 años. Sin embargo, a finales del 2007, la administración Yar'Adua había empezado una revisión gradual de algunas de las políticas económicas de Obasanjo, incluida la revocación de algunas privatizaciones (de refinerías, por ejemplo) y se suscitaron dudas relativas al proyecto de modernización ferroviaria (se denunció que los acuerdos de financiación violaban las directrices fiscales y constitucionales). Es todavía más desconcertante que el mediocre estado de la economía, el deterioro de las infraestructuras y el bajo nivel de vida se den en el contexto de unos precios del petróleo muy altos (con el aumento de ingresos que ello comporta).

Seguridad interior

Diversas formas de amenaza a la seguridad interior se ciernen sobre la Nigeria post-militar, muy especialmente los disturbios etno-religiosos y la violencia electoral. Es comprensible que las disputas por el poder político produjesen un aumento de los casos registrados de violencia política y electoral durante los preparativos de las elecciones de abril del 2007. Por ejemplo, el proyecto SAS (*Small Arms Survey*), con base en Ginebra, identificó 234 incidentes con violencia armada que habían tenido lugar en 27 de los 36 estados de Nigeria entre diciembre del 2006 y marzo del 2007. Sin embargo, la violencia armada en la inestable región del Delta del Níger (Southsouth), muy rica en petróleo, fue la amenaza más grave a la seguridad interior del país en el 2007. Durante la última década, han aparecido en la región varios grupos armados para protestar contra la degradación medioambiental por parte de las multinacionales del petróleo, para exigir una mayor participación y control de los recursos e ingresos procedentes del petróleo, y más poder político y representación para las minorías étnicas de la región. Desde 1999, los seis estados de la región han visto incrementar su participación en las rentas del petróleo desde un 2% a un 13%, convirtiéndose de este modo en los estados más ricos de Nigeria.

Desde el 2006, parte de los beneficios procedentes del aumento del precio internacional del petróleo han ido a parar a los estados del Delta del Níger, y algunos de ellos, Rivers por ejemplo, recibe más de 100 millones de dólares de rentas al mes. Asimismo, el gobierno nacional creó la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger (NDDC) para catalizar la transformación socioeconómica y medioambiental de la región.

Sin embargo, los elevados niveles de corrupción oficial y de irregularidades políticas por intereses personales en la región y en el resto de Nigeria han frenado de un modo considerable el progreso del desarrollo de la región, y una mayoría de sus habitantes se encuentran entre los más pobres de Nigeria y África. La acción combinada de la pobreza, los agravios, la proliferación de armas de fuego de bajo calibre, el descontento de los jóvenes y la lucha por el poder entre los clanes y las élites políticas ha producido una situación inflamable que hace que la región y sus vías fluviales sean las más inseguras de África. El nivel de violencia e inseguridad de la región durante el 2007 se intensificó debido a los numerosos actos de *bunkering* (repostado de combustible en alta mar, con vertidos que forman mareas negras), piratería, secuestros (para cobrar rescate) y otras actividades criminales que a menudo contaron con la connivencia de agentes estatales, incluidos funcionarios militares de alto rango. Un cálculo conservador estima en unas 300 el número de personas secuestradas entre enero del 2006 y marzo del 2007; y según el SAS, el número de secuestros se incrementó en el 2007⁹. Además, la Oficina Marítima Internacional (IMB) consignó un incremento de los ataques a mano armada contra embarcaciones en aguas nigerianas (Delta del Níger) de 6 (el año 2006) a 27 (el año 2007), convirtiendo a las vías navegables de Nigeria en las segundas menos seguras de África (por detrás de las de Somalia)¹⁰.

Otra cosa importante es que los grupos armados se han unido en el MEND (Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger) y han intensificado los ataques mediante una combinación de mercenarios extranjeros contratados y armamento muy sofisticado. Esto tuvo como consecuencia un aumento de los actos de sabotaje contra la producción de gas y petróleo haciendo volar oleoductos, atacando barcos y paralizando estaciones de bombeo. A finales del 2007, el gobierno nigeriano reconoció oficiosamente que los ataques del MEND habían reducido la producción de crudo en un 25% (una disminución de 600.000 barriles por día), con unas pérdidas de más de 4.400 millones de dólares. Los ataques y secuestros tuvieron como consecuencia una mayor militarización de la región mediante el despliegue por parte del gobierno de un equipo especial de seguridad, la fuerza de operaciones conjuntas JTF (*Joint Task Force*, “Grupo de Tareas Mixtas”), y la puesta en marcha de la “Operación Restaurar la Confianza” para poner freno a la inseguridad y proteger las instalaciones petrolíferas. La

administración Yar'Adua ha dejado clara su disposición a enfrentarse a los grupos militantes y a seguir aplicando la política de Obasanjo del “palo y la zanahoria”. Con todo, por lo que respecta a la seguridad, la situación en la región sigue siendo incierta e inestable, y será un importante reto a la estabilidad socioeconómica y política de Nigeria en los próximos años.

Asuntos exteriores

Nigeria continuó los esfuerzos, iniciados después de su independencia, en favor de la pacificación de los lugares donde hay conflictos, dentro y fuera de África. Durante la era post-militar, el presidente Obasanjo y Nigeria estuvieron activamente involucrados en los procesos de paz en Sierra Leona, Liberia, Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea Bissau y las Comores. El compromiso nigeriano se concretó en respaldar y ofrecerse como sede para celebrar conversaciones de paz, en desplegar fuerzas de pacificación, en prestar asistencia a sociedades en situación de post-conflicto, y en encabezar otras iniciativas africanas para la seguridad y el desarrollo. En efecto, Nigeria desempeñó un importante papel en la reconfiguración de

“La dinámica política del 2007 ha ampliado el espacio político y ha fortalecido algunas instituciones democráticas”

la arquitectura del desarrollo, la paz y la seguridad tanto a nivel subregional (mediante la Comunidad Económica de Estados del África Occidental –CEDEAO–) como a nivel continental (mediante el Consejo por la Paz y la Seguridad de la Unión Africana, y la Fuerza de Reserva Africana – ASF–). Asimismo, el país encabezó nuevas iniciativas para la seguridad en la región rica en petróleo del Golfo de Guinea mediante la Comisión del Golfo de Guinea y la GGESS (Estrategia de Seguridad para la Energía del Golfo de Guinea), concebidas para combatir el robo de petróleo, la piratería y la inseguridad marítima.

El acontecimiento más importante del 2007 en el campo de la política exterior fue el relativo a los debates, controversias y confusión suscitados por la decisión que tomó Estados Unidos en febrero de establecer un nuevo Mando Militar Africano (AFRICOM). La creación de este mando representó un claro reconocimiento de la creciente importancia de África en el panorama geoestratégico internacional, muy especialmente en temas como el antiterrorismo, el narcotráfico y la seguridad energética. Por ejemplo, un informe del año 2000 del *American National Intelligence Council* estimaba que el año 2015 el Golfo de Guinea suministraría el 25% de las exportaciones de petróleo a América. Estados Unidos racionalizó el AFRICOM como continuación de sus programas de asistencia y formación creados para mejorar la capacitación y la aptitud de

los países africanos en las operaciones de pacificación, lucha antiterrorista y gestión de desastres.

A pesar de la novedad de las intenciones anunciadas por el AFRICOM, muchos países africanos se opusieron a la propuesta, especialmente debido al hecho, no sólo percibido sino real, de que los países africanos no habían sido consultados antes de anunciarse la iniciativa, y también debido a su limitada interoperabilidad con la ASF. El papel de liderazgo que desempeña Nigeria en África y su historia de una política exterior dinámica, junto con las fuertes relaciones bilaterales a nivel político y socioeconómico que mantiene con Washington significan que la respuesta de Nigeria a la propuesta del AFRICOM ha sido ambivalente. Hasta ahora, la respuesta nigeriana ha oscilado entre el rechazo, la aceptación, la contemporización y el compromiso. Por ejemplo, el gobierno de Abuja, tratando de afirmar su compromiso con la ASF y con el principio de “soluciones africanas para los problemas africanos”, rechazó inicialmente la propuesta del AFRICOM, especialmente la posibilidad de instalación de bases militares norteamericanas en Nigeria o en cualquier otra parte de África. El hecho de que el AFRICOM pudiese debilitar el plan para el 2010 de la ASF (basado en las brigadas suministradas por las REC –Comunidades económicas regionales de la Unión Africana–) fue citado como la principal justificación de dicho rechazo. Sin embargo, después de la visita del presidente Yar'Adua a Washington en diciembre del 2007 y a la luz de la puesta en cuestión de la legitimidad del régimen en el interior, se dio una respuesta más conciliadora, posiblemente condicionada a una reestructuración de los planes del AFRICOM que excluya la instalación de bases militares en África. Aunque el gobierno nigeriano reivindica la consistencia de su política (de oposición) respecto al AFRICOM, la situación posterior a la visita de Yar'Adua a Washington indica que se ha producido un cambio en el sentido de una mayor aceptación y compromiso, especialmente para explorar la posibilidad de engranar el AFRICOM con la iniciativa de la ASF.

En conclusión durante la última década, la violencia armada, la inseguridad física, la pobreza, la corrupción, el deterioro de las infraestructuras y la inestabilidad política han seguido siendo desafíos fundamentales para la nación nigeriana. Es cierto que la dinámica política del 2007 ha ampliado el espacio político y ha fortalecido algunas instituciones democráticas. Sin embargo, el elemento normativo de la democracia sigue estando poco desarrollado. Una cuestión muy importante es que la moral de los nigerianos de a pie y su fe en las instituciones existentes han disminuido considerablemente. La mayoría sigue lamentando las enigmáticas paradojas que se dan en Nigeria: un país productor de petróleo que importa combustible, pero que no puede proteger a

sus ciudadanos de los efectos de los elevados precios del petróleo; y un deterioro de las estructuras en un momento en que el país está ingresando sus más elevadas rentas por la venta de su petróleo. La severidad de estos desafíos no parece haber desaparecido con el nuevo gobierno de Yar'Adua a juzgar por sus recientes pronunciamientos. Sin embargo, igual que en caso de sus predecesores, el verdadero desafío no está en el diagnóstico, sino en saber traducir el enorme potencial humano, de recursos y financiero del país en unas condiciones de vida mejores, en una mayor estabilidad sociopolítica y en un incremento de la seguridad.

Notas

1. Véase el “Report of European Parliament Election Observation Mission to Nigeria 2007”, que se puede consultar en: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/missions/2004-2009/20070421_nigeria_en.pdf
2. Véase, por ejemplo, “Lagos Journal; Nigerians Lament ‘Locust’ That Pick Nation Bare”, *The New York Times*, 12 de octubre de 1995. Se puede consultar en: <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9402E5D91339F931A25753C1A963958260>
3. Maier, K. (2000) *This House Has Fallen. Nigeria in Crisis*, USA: Westview, p.xxii.
4. Human Rights Watch (HRW), Nigeria: “Fine. The Human Rights Impact of Local Government Corruption and Mismanagement in River State, Nigeria”, vol. 19, n° 2(A), p.16.
5. Para la tabla de percepción de la corrupción global, véase: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007.
6. Smith, D.J. (2007) *A Culture of Corruption. Everyday Deception and Popular Discontent in Nigeria*, Princeton/Oxford: Princeton University Press, p.12.
7. Véase “\$17bn rail project in jeopardy—Minister”, *Daily Trust Newspaper*, Nigeria, 8 de noviembre de 2007.
8. Hazen, J. and Horner, J. (2007) “Small Arms, Armed Violence and Insecurity in Nigeria: The Niger Delta in Perspective”, *Small Arms Survey Occasional paper*, No 20, p.52.
9. Hazen and Horner 2007, p.71.
10. Véase International Chamber of Commerce, “Piracy attacks rise 14% as Nigerian and Somalian coasts become more dangerous”, *News Report*, 16 de octubre de 2007. Se puede consultar en: <http://www.iccwbo.org/iccbghha/index.html>.
11. Véase “JTF uncovers mercenaries in militants’ dens”, *Vanguard Newspapers*, Nigeria (Online edition), 25 de diciembre de 2007. Se puede consultar en: <http://www.vanguardngr.com>.
12. Hazen and Horner 2007. (op.cit.) p.15.

